

Diagnósticos de una cooperación en crisis y de la crisis de la cooperación en España

La decisión del Gobierno socialista de recortar la Ayuda al Desarrollo en los próximos años, en el marco de las políticas de ajuste neoliberal dirigidas a recortar el déficit público, ha pasado desapercibida entre la sociedad y en el propio sector. Sin embargo, esta medida ha dado carta de naturaleza a una situación de permanente crisis en que se desenvuelve nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo desde hace décadas, al intensificarse numerosos problemas institucionales, técnicos y estratégicos que mantienen nuestra política de cooperación en una situación de precariedad histórica, alejada de los cambios y transformaciones que otros donantes han venido realizando y fuera de cualquier atisbo de crítica razonada encaminada a su mejora.

En el marco de las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, la involución histórica que el ejecutivo anunció en mayo de 2010 sobre la política de cooperación al desarrollo, que ha previsto una reducción en 800 millones de euros el presupuesto de la AOD para los dos próximos años, pasó sin pena ni gloria mientras la sociedad asimilaba otros muchos recortes. Sin embargo, fue llamativo que ni siquiera desde el propio sector de la cooperación se ofrecieran respuestas de entidad ante el alcance de estas decisiones, lo que supone todo un síntoma sobre la salud del medio.¹

Tengamos en cuenta que esta decisión supondrá un retroceso mínimo del 10% del volumen global de la AOD española en los próximos años, en la medida en que el recorte del Gobierno central ha ido seguido por descensos

Carlos Gómez Gil es profesor en el Departamento de Análisis Económico Aplicado, Universidad de Alicante

¹ Mientras que el 20 de julio de 1996, la Coordinadora de ONGD publicó un artículo de opinión muy crítico en el diario *El País* contra los recortes anunciados por el gobierno del PP de aquel entonces en los presupuestos de la cooperación española, en esta ocasión no se ha producido algo similar, a pesar de que estos recortes tienen una mayor trascendencia.

mucho más cuantiosos en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, difíciles de cuantificar en estos momentos, pero que oscilan entre un 10 y un 100%. Sin embargo, una vez más se ofreció información inexacta sobre el alcance real de este recorte, ya que la primera nota oficial del Gobierno del 11 de mayo hablaba de un descenso global de 600 millones de euros en los dos próximos años, que pocas semanas después se elevaron hasta los 800 millones, si bien, los presupuestos de la AOD para 2011 plantean una disminución solo en este año de 918 millones de euros.

Las medidas de recorte adoptadas por el Gobierno de Zapatero sobre la ayuda española venían a terminar con el espejismo en el que esta se mantenía desde la anterior legislatura y donde vive instalada desde tiempos inmemoriales. Y lo que es más importante, estas decisiones dan carta de naturaleza a una situación de permanente crisis en la que se desenvuelve la AOD en nuestro país; por encima de las metáforas y los discursos grandilocuentes; más allá de los viajes publicitarios y las campañas promocionales que tratan de evitar abordar las cuestiones capitales que están en el corazón de los espacios de tensión paradigmática sobre los que discurre la ayuda pública al desarrollo.

Una crisis estructural y cronificada

La crisis de la cooperación española, que este Gobierno oficializó con el anuncio de amplios recortes sobre la misma, no tiene una exclusiva motivación económica, ni mucho menos, sino que hunde sus raíces en problemas de mucho mayor calado que con el paso de los años se han acabado por cronificar. Tratemos de analizar algunos de estos dilemas estructurales que tiene abiertos la cooperación española.

La verdadera repercusión del recorte presupuestario

En España se ha hablado mucho de los dineros de la ayuda, pero muy poco de sus políticas. Uno de los ejes sobre los que se cimentó la candidatura de Rodríguez Zapatero fue la renovación de la ayuda al desarrollo y especialmente el cumplimiento del 0,7% del PIB en AOD que se convirtió en una de las propuestas totémicas del PSOE. Sus sucesivos gobiernos no han parado de repetir con énfasis que el compromiso del 0,7% era sagrado y que se alcanzaría, no ya en el año 2015, fecha fijada por la comunidad internacional a través de los ODM, sino tres años antes, en 2012, como demostración inequívoca de su implicación. Por vez primera, fijaron un calendario concreto, preciso y verificable que se acompañaba de aportaciones económicas crecientes y nunca antes vistas en la historia de la cooperación española que permitieron remontar la negra etapa de progresivos descensos experimentados en la década anterior, alcanzándose así el máximo porcentaje de AOD ejecutada por

España en su historia, que ha llegado al 0,46% de AOD en 2009, es decir, 4.728 millones de euros. Justo es reconocer estos avances.

Sin embargo, siendo esenciales los recursos económicos para llevar a cabo las políticas, en el caso de la ayuda al desarrollo no son el componente exclusivo, ni mucho menos, si no se acompañan al mismo tiempo de otras decisiones, dispositivos y estrategias que aseguren la adecuada finalidad de estos recursos. El PSOE basó la estrategia de futuro de la AOD en el cumplimiento del 0,7%, sin duda, por la fuerza mediática y simbólica de este compromiso, que acabó repitiendo como un *mantra* vacío de contenido, sin abordar cambios imprescindibles sobre el presente y sin que fuera acompañado de una profunda modernización en sus estructuras institucionales, técnicas y estratégicas.

La crisis de la cooperación española no tiene una exclusiva motivación económica, sino que hunde sus raíces en problemas de mucho mayor calado

Ahora bien, cuando se anuncia la imposibilidad de alcanzar el 0,7% de la mano de importantes reducciones en los presupuestos de la ayuda estatal en los próximos años, todo el edificio sobre el que se cimentaba la cooperación española tiembla, porque no se ha venido trabajando en su consolidación y fortaleza. Y lo que es peor, la decisión del Gobierno central lleva a que se adopte en cascada también, si cabe con mayor énfasis, en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de toda España, que como un castillo de naipes ven desmoronar sus políticas de cooperación descentralizada con recortes que en algunos casos han llegado hasta el 100% de sus presupuestos.

A la luz de todo ello, resulta particularmente irresponsable que el presidente Rodríguez Zapatero siga insistiendo en que España llegará al 0,7% en el año 2015 en importantes foros internacionales, como hizo en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrada en Naciones Unidas, el 20 de septiembre de 2010, donde puso una vez más en evidencia su profundo desconocimiento del rumbo y del verdadero calado de las políticas de ayuda.

Banalización de las políticas de ayuda

A medida que este Gobierno centró todas sus energías en el logro del 0,7%, situó en un segundo plano otras exigencias mucho más acuciantes, reduciendo la complejidad de las políticas de ayuda y los problemas de la pobreza en el mundo a una simple cifra que se creía

que crecería frenéticamente, al igual que nuestra economía, en plena quimera de la abundancia, sin necesitar ningún otro horizonte, carente de pasado y ausente de cualquier otro futuro. Con ello, el principal proyecto político que los gobiernos socialistas han venido empujando sobre la AOD se ha basado en alcanzar el calendario del 0,7%, sin abordar las grandes reformas estructurales e institucionales pendientes que esta acumulaba desde hacía décadas y sin afrontar sus grandes dilemas históricos.

Por el contrario, se ha alimentado un discurso épico y acrítico, cada vez más condescendiente con gobiernos e instituciones multilaterales con las que compartimos intereses opuestos, en no pocas ocasiones, a los mismos objetivos de muchas de las iniciativas de cooperación que decimos promover. El vergonzoso papel que ha tenido el Gobierno socialista en Colombia durante la etapa de Uribe, o el apoyo entusiasta que los Documentos de Estrategia País o los de Actuación Especial contienen sobre políticas extremadamente dañinas que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional exigen en los países prioritarios para la cooperación española, son buen ejemplo de lo que decimos.

De esta forma, la ayuda española se ha construido esencialmente en los últimos años como una aportación caritativa y acrítica necesaria para que la globalización neoliberal avance, pasando de puntillas sobre los mismos elementos generadores de pobreza y sufrimiento sobre los que pretende intervenir y cuya causa es un capitalismo voraz carente de normas y la preeminencia de un mercado que impone sus intereses. Cuando no ha sido, pura y llanamente, un simple instrumento económico, político, comercial y policial a nuestro servicio, como se ha puesto de manifiesto con las medidas de control de la inmigración en África o el apoyo a determinados grandes exportadores con recursos de la cooperación española. Todo el proceso ha ido aderezado de metáforas épicas² que acababan por banalizar la finalidad transformadora de las políticas de cooperación en medio de la globalización neoliberal.

Esta banalización extrema en los mensajes, análisis y compromisos se mantiene plenamente vigente, trasladándose hasta los foros internacionales más relevantes. Una lectura del discurso que el presidente Rodríguez Zapatero leyó en la sesión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio³ da buena idea de lo que decimos, al defender los «importantes avances obtenidos en el cumplimiento de los ODM», que según él, «pueden ser cumplidos en el 2015», o que «suponen un fin en sí mismos», algo que ni siquiera los propios informes de Naciones Unidas sostienen.

² Como cuando el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, en una gira por África en el año 2008 para ofrecer dinero de la cooperación a cambio de actuaciones de lucha contra la inmigración irregular en diferentes países del continente, afirmó que España había pasado «de la hucha del Dómund a la ayuda institucional», como recogió el diario *El País*, el 29 de enero de 2008.

³ Intervención del presidente del Gobierno de España, don José Luis Rodríguez Zapatero, en la sesión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio, Nueva York, 20 de septiembre de 2010.

Extrema precarización

Pero donde este Gobierno ha actuado de forma completamente irresponsable ha sido en aumentar una precarización extrema en las estructuras institucionales, técnicas y profesionales básicas necesarias para gestionar una ayuda al desarrollo cada vez más relevante que se pretendía llevar hasta el 0,7%. De nada sirve afirmar que este es el estado natural en que se mantiene nuestro sistema de ayuda desde su origen mismo, en la medida en que el propósito de incrementar de forma notable los recursos destinados a ella, así como el cumplimiento de acuerdos y compromisos internacionales exigían de una vez por todas acometer reformas y modernizaciones inaplazables.

Los gobiernos socialistas emprendieron una huida hacia adelante, optando bien por mantener estructuras disfuncionales que han estado lastrando aspectos relevantes para la gestión del dispositivo de nuestra ayuda –como la AECI, a la que a pesar de haberle añadido la D de desarrollo, sigue siendo una institución arcaica y disfuncional– o bien por crear dispositivos inoperantes basados en la contratación masiva de colaboradores, becarios o suministradores de servicios externos. De esta forma, el número de profesionales con trayectoria e historia al frente de parcelas relevantes de nuestra cooperación se ha ido reduciendo como consecuencia de la inyección masiva de trabajadores extremadamente precarios, que en algunos casos, se han mantenido durante años como trabajadores autónomos para no generar relación laboral alguna en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Y por si fuera poco, este mismo esquema de precariedad se ha trasladado a las OTC en el exterior, generándose situaciones verdaderamente ridículas que dejaban al descubierto la debilidad de nuestro sistema de ayuda, trasladaban una mala imagen –como en el caso de los becarios provisionales que desconocían proyectos esenciales–, mostraban incapacidad de atender a los técnicos evaluadores que acudían a diferentes países a evaluar proyectos en marcha de la cooperación española y desatendían las solicitudes que enviaban a las OTC los técnicos que se trasladaban al extranjero para llevar a cabo iniciativas relacionadas con la cooperación española, entre otras.

El despido masivo de un centenar de trabajadores de la AECID en fechas recientes, todos ellos autónomos, que llevaban en algunos casos hasta 10 años trabajando en la cooperación española, con la prohibición de ocupar sus despachos y acceder a sus puestos de trabajo, como respuesta a la reclamación laboral que algunos de ellos hicieron ante las magistraturas de trabajo y el fallo a su favor que obtuvieron, dejó al descubierto lo que era un secreto a voces pero que nadie se atrevía a expresar en público.⁴ Eran trabajadores, dis-

⁴ El diario *El País* daba cuenta de este hecho en una información titulada «Los recortes en la AECID dejan sin cubrir puestos clave de la cooperación», el día 28 de abril de 2010, en un artículo de Josep Garriga que causó verdadero malestar entre los responsables de la cooperación española, no tanto por su contenido, que era completamente verídico, sino por el hecho de que se difundieran a la opinión pública estos hechos.

ponían de despachos, de cuentas de correo institucionales, de tarjetas de identificación, representaban a la cooperación española desde hace años ante instituciones y organismos, pero se les negaba su vinculación como trabajadores de la misma cooperación a la que servían. Y ante la posibilidad de que se reconociera este hecho de forma masiva, se produjeron sus despidos. Aún más, algunos de ellos acaban de ser sustituidos por agentes forestales que estaban desocupados en la Administración General del Estado, hecho que pone aún más de manifiesto la importancia que concede este Gobierno a la ayuda al desarrollo.

Dentro de la propia SECI, los técnicos de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) –la institución estrella creada en esta etapa de gobierno–, pasan a trabajar para la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAP), aunque realizan los mismos cometidos anteriores. De esta forma, desde el Gobierno socialista y la Secretaría de Estado de Cooperación se ha impulsado una progresiva privatización de estructuras esenciales de la cooperación estatal, que son gestionadas por la Fundación Carolina, FIIAPP, TRAGSA y P4R, fundamentalmente, en algunos casos mediante adjudicaciones tan opacas como controvertidas.

¿Cómo podía resultar creíble el 0,7% prometido por el Gobierno en medio de un escenario de precariedad, vulneración de derechos laborales y ausencia de funcionarios y técnicos esenciales para la gestión de la cooperación de un Estado?

Lamentablemente, esta inestabilidad profesional, técnica e institucional se ha trasladado al conjunto de capacidades y dispositivos utilizados en la cooperación española, tanto dentro como fuera de España, empapando y filtrando todos los niveles de gestión. Con ello se ha impedido una actualización y modernización tan imprescindible como inaplazable del sistema de cooperación español.

Ausencia de cualquier atisbo de crítica y renovación

Si bien desde los sucesivos gobiernos socialistas se han tratado de recomponer espacios esenciales de participación social que habían sido cortados con anterioridad, los responsables de la cooperación favorecieron desde el primer momento a aquellas entidades, técnicos e investigadores acríticos, generadores de un discurso laudatorio e insustancial, suprimiendo cualquier atisbo de crítica razonada, tan necesaria en las políticas de desarrollo. Es muy significativo que el Consejo de Cooperación al Desarrollo, que debería ser un órgano independiente de análisis y supervisión de estas prácticas, mantenga expertos desde la creación misma de este órgano, en el año 1994, que primero trabajaron para el Gobierno socialista, luego para los del PP y, posteriormente, de nuevo para los del PSOE hasta el momento actual, habiéndose añadido algunos otros de sumisión asegurada. No se busca a los mejores, sino a los más dóciles y acríticos en cualquier ámbito de la cooperación española.

Por si todo ello fuera poco, se han producido retrocesos injustificables en la información de parcelas fundamentales de la cooperación española, como en los créditos FAD, cuyos informes anuales que se venían realizando desde el año 2000 fueron suprimidos por este Gobierno,⁵ impidiéndose con ello el acceso a datos esenciales sobre su uso e incumpléndose así los acuerdos de información semestral al Parlamento. No se trata solo de que se haya impedido acceder a datos básicos sobre el instrumento más importante en la historia de la cooperación española, sino que se niega a los propios parlamentarios el acceso a esta información esencial. En diciembre de 2008, el diputado de CiU, Carles Campuzano, pidió al Gobierno información sobre la ejecución del FAD en 2008; en 2009⁶ obtuvo la parca respuesta: «ha sido del 90%» sin más información, documento o listado lo cual retrata la política de información y transparencia llevada a cabo por el Gobierno.

Uno de los sectores más expuestos a la vulnerabilidad de los tiempos es el de las políticas de ayuda al desarrollo y de solidaridad en este nuevo darwinismo social defendido por gobiernos e instituciones de toda naturaleza

Tampoco es casual que la información que España ofrece sobre la financiación concedida a las ONG sea prácticamente inexistente para uno de los donantes que mayores recursos gestiona a través de estas organizaciones. Como ejemplo de ello, mientras que la Agencia Noruega de Desarrollo (NORAD) publica varios informes anuales de contenido crítico con centenares de páginas e información detallada solo en el campo de la cooperación con las ONG de este país, el seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI), que recoge todas las actuaciones de la cooperación española, apenas ofrece poco más de una página sobre este sector cada año. El PACI se ha acabado por convertir en un documento tan farragoso como antipático, con abundantes números pero incapaz de dar respuesta a cuestiones esenciales y de ofrecer datos básicos sobre la ejecución y pertinencia de la cooperación española.

Es cierto que se han multiplicado los informes técnicos, estudios y evaluaciones sobre la cooperación española, pero en su mayoría, han estado alejados de cualquier análisis crítico, se han omitido datos y diagnósticos comprometidos, no se ha mostrado voluntad de que sirvan posteriormente para alimentar cambios o aplicaciones efectivas, cuando no se han con-

⁵ Nos referimos a los informes pormenorizados sobre la actividad del FAD que publicaba anualmente la Secretaría de Estado de Comercio y que dejaron de hacerse en 2008, siendo retirados incluso de internet, ya que a lo largo de toda la historia de los créditos FAD, desde su creación en 1976 hasta el año 2010, nunca la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional ha realizado evaluación, informe o memoria global sobre el que ha sido el principal instrumento en la historia de la cooperación española.

⁶ Respuesta del Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios a la pregunta escrita (184/48358) del diputado Carles Campuzano Canadés, nº 58404, de fecha 26 de febrero de 2009.

vertido en un espacio clientelar más al servicio del grupo de amigos, lo que lleva a que se esté incumpliendo incluso la normativa sobre concursos públicos para su contratación.

Mantenimiento de poderosas estructuras clientelares

Frente a una apariencia de cambios y reformas, muchos de ellos superficiales y sin voluntad de renovación profunda del sistema de ayuda, el Gobierno socialista ha sido incapaz de acometer transformaciones imprescindibles e inaplazables. La razón de ello está en el deseo de mantener los intereses de determinados grupos, sectores y estamentos que utilizan en algunos casos los recursos e instrumentos de la AOD de forma clientelar. Cada sector de la cooperación española presiona para mantener y aumentar su poder y sus recursos en el sector y el resultado de todo ello es un gigantesco puzle en el que cada grupo sitúa sus propias piezas y presiona para disponer de más poder y recursos.

La pervivencia de intereses particulares

Y la consecuencia más visible de todo ello es la pervivencia en la AOD de poderosos intereses particulares que con el paso del tiempo se trata de justificar renovando el discurso y buscando su difícil encaje en acuerdos y compromisos internacionales de todo pelaje, al margen de cualquier política progresista y en sentido contrario a las buenas prácticas que otros importantes donantes vienen llevando a cabo.

El ejemplo más elocuente de lo que decimos ha sido la lamentable transformación de los criticados créditos FAD en el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y el Fondo de Promoción del Desarrollo (Fonprode), bajo la cobertura de la Ley de Reforma del Sistema Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española, y de la Ley de Creación del Fondo para la Promoción del Desarrollo, que aprobó recientemente el Gobierno socialista. El Gobierno renunció a llevar a cabo una evaluación detallada sobre el más importante instrumento en la historia de la cooperación a lo largo de sus 24 años de vigencia, y a atender a las peticiones y propuestas, en algún caso extraordinariamente documentadas, que se hicieron desde determinadas organizaciones civiles e investigadores, y decidió realizar una aparente reforma que daba carta de naturaleza a su utilización como principal instrumento generador de deuda externa y pobreza en los países del Sur.

No parece preocupar a nadie que el nuevo Fonprode permita, como recoge en el apartado E de su artículo 2, dedicar recursos de la ayuda española a la «Concesión, en su caso, de créditos, préstamos y líneas de financiación en términos concesionales, incluidos aportes a programas de microfinanzas y de apoyo al tejido social productivo, así como la adqui-

sición temporal de participaciones directas o indirectas de capital o *cuasi capital* [sic] en instituciones financieras o vehículos de inversión financieras...» ¿Cómo se puede seguir autorizando meter dinero que supuestamente se dirige a la ayuda al desarrollo para adquirir acciones de *cuasi capital*? El capital o lo es o no lo es, de manera que no puede “cuasi serlo”, lo cual demuestra hasta qué punto se abren resquicios para financiar iniciativas que no pueden ser financiadas, algo que ya se ha empezado a hacer mediante la concesión de recursos del Fonprode a entidades radicadas en paraísos fiscales.

En definitiva, no es más que cambiar el nombre a los mismos procedimientos y mantener buena parte de los elementos históricos de opacidad y financiación de iniciativas polémicas que han rodeado a los créditos FAD desde su creación.

Buen ejemplo del grado de degradación alcanzado en las políticas e instrumentos de la ayuda española se evidencia en un hecho tan insólito como el haber incorporado a la nueva Ley recientemente aprobada que regula el Fonprode, que será uno de los principales instrumentos futuros de nuestra ayuda al desarrollo, disposiciones legales para cuestiones que nada tienen que ver con la AOD⁷, como la jubilación de los controladores aéreos y la regulación de los órganos rectores y de gobierno de las cajas de ahorros. Bien es cierto que de forma significativa, no ha habido crítica alguna a ello desde ninguno de los sectores de la cooperación.

Algunos interrogantes finales

Con el paso del tiempo, una de las cosas que hemos ido conociendo inequívocamente sobre la cooperación española son sus malas prácticas y políticas, a pesar de lo cual, este Gobierno ha mantenido con renovada vigencia muchas de ellas. Así, la distancia entre los discursos y las prácticas reales se ha mantenido con fuerza en nuestra AOD, al tiempo que se viene tratando de impedir o dificultar el conocimiento exacto sobre la misma. Por otra parte, la fragmentación de la ayuda entre los diferentes sectores y grupos de interés que se han ido amontonando a su alrededor, dificultan el avance de criterios, discursos, análisis y prácticas renovadoras.

En momentos tan turbulentos como los que atravesamos, conviene fijar bien los cimientos de los dispositivos públicos que el huracán neoliberal que sacude al mundo entero está erosionando y cuestionando. Y, sin ninguna duda, uno de los sectores más expuestos a la vulnerabilidad de los tiempos es el de las políticas de ayuda al desarrollo y de solidaridad,

⁷ Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, BOE núm. 257, sábado 23 de octubre de 2010, disposiciones finales segunda, tercera y cuarta.

arrojados como estamos a este nuevo darwinismo social defendido por gobiernos e instituciones de toda naturaleza.

Ahora bien, el Gobierno socialista debería dar respuesta a dos cuestiones básicas pero esenciales que ha ocultado. ¿Nuestro compromiso con las políticas de Ayuda Oficial para el Desarrollo va a depender en adelante de nuestro crecimiento económico y de los procesos de inestabilidad financiera que pueda experimentar España?, y en línea con ello, ¿qué grado de prioridad otorga el Gobierno a las políticas de AOD? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el elemento diferencial que aporta un Gobierno socialista en sus políticas de cooperación internacional hacia los países y pueblos más desfavorecidos? La respuesta a ambas preguntas pasa por dos términos devaluados en los tiempos actuales, como son la política y la ideología.

Precisamente, en tiempos de limitaciones presupuestarias cobra más importancia intervenir sobre aquellos planos que no pasan, necesariamente, por un mayor aumento de recursos económicos, como son los que precisamente se han expuesto, tales como el abandono de la banalización, la eliminación de la precariedad, el aumento de la capacidad de crítica y renovación, la superación del clientelismo y de los intereses egoístas que la lastran desde hace décadas, por señalar algunos de ellos.

Así las cosas, el panorama que se está configurando en la cooperación española con motivo de la crisis no puede ser más sombrío: institucionalmente hay un progresivo derrumbe; los recortes son de mucha mayor cuantía que los anunciados inicialmente por el propio presidente del Gobierno; la rendición de cuentas se ha reducido a una caricatura; el interés empresarial y geoestratégico está llevando a un perfil de ayuda similar a los años negros de las década de los noventa del siglo XX; la ausencia de transparencia, publicidad y equidad es clamorosa en todos sus niveles; la cooptación de personas y organizaciones dóciles y cómplices con las políticas llevadas a cabo está produciendo un proceso de selección deliberado en el que se abren paso los de siempre; mientras en la cooperación descentralizada reina la confusión y el desguace de muchos de los avances y compromisos trabajados con esfuerzo en las últimas décadas.

La cooperación española adolece de relato, rigor y coherencia, y su rumbo es incierto. Si como decía Hannah Arendt, todo proceso político tiene un objetivo, un fin y un sentido explícito, nuestra política de ayuda carece en estos momentos de todo ello.